Como consecuencia de la misma se inician diligencias previas, dándose traslado a «Proar XXI, S. L.» y a todos los adquirentes de las 44 viviendas restantes para que manifestaran lo que estimaran conveniente en el plazo de quince días.

En dicho plazo, sólo don Jesús Iván Lanchas Fernández y doña Milagros Manteca Ortiz y don Diego Fernando Méndez Mendoza y doña María José Acebo Echavarrí manifiestan que la promotora les propuso un paquete de mejoras con la condición de que o las cojían todas o ninguna. La promotora no ha formulado alegación alguna.

La denuncia no acredita los hechos imputados a la promotora, no se desprende de las actuaciones practicadas que se haya podido cometer ninguna irregularidad en materia de viviendas de protección oficial.

Por todo ello, vistas las disposiciones aplicables contenidas en el Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial; el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Vivienda; el Real Decreto 2.960/1976, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la legislación de Viviendas de Protección Oficial; el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005; el Decreto 66/2002, de 6 de junio, sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo en Cantabria, los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, y demás disposiciones atinentes y de general aplicación,

SE ACUERDA

El archivo de las diligencias previas practicadas contra «Proar XXI, S. L.», como consecuencia de la denuncia contra ella formulada por don Sergio Cubián González y doña Cecilia Torres Miyar.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Obras Públicas y Vivienda en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en concordancia con los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Santander, 27 de junio de 2006.—El director general de Vivienda y Arquitectura, P.S. el secretario general de Obras Públicas y Vivienda, Decreto 151/2003, de 28 de agosto, B.O.C. nº 176, Víctor Díez Tomé.

06/8829

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Convenio de encomienda de gestión realizada por el Gobierno de Cantabria (Consejería de Medio Ambiente) a la empresa Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A., (MARE, S.A.), para la gestión de determinados Servicios en Materia de Residuos Urbanos y Hospitalarios.

En Santander, 30 de junio de 2006.

REUNIDOS

De una parte, la excelentísima señora doña Dolores Gorostiaga Sáiz, Vicepresidenta y Consejera de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria, con CIF: S3933002B y con sede en Peña Herbosa número 29, (39003 Santander), y facultada expresa-

mente para la firma del presente convenio por acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 29 de junio de 2006, y

De otra parte, el excelentísimo señor don José Ortega Valcárcel, con DNI número 13009452 P, en nombre y representación, por su condición de Presidente, de la empresa pública Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A. (MARE, S.A), sociedad mercantil enteramente participada por el Gobierno de Cantabria, con CIF número A- y domicilio en calle Lealtad, 14, 1º derecha, (39002 Santander). Se encuentra facultado para la celebración de este acto por Acuerdo del Consejo de Administración de 21 de agosto de 2003,

Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria para formalizar el presente convenio de encomienda de gestión y, en consecuencia,

EXPONEN

1 - En el artículo 8 de la Ley 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Cantabria, según las modificaciones introducidas mediante la Ley 6/2005, de 27 de diciembre, de medidas administrativas y fiscales, se atribuye a la Comunidad Autónoma la prestación del servicio público de gestión de residuos urbanos, en el que se incluyen una serie de actividades que serán de recepción obligatoria por parte de las Entidades locales beneficiarias y cuya retribución se llevará a cabo mediante la tasa de gestión final de residuos urbanos, creada en la Ley 6/2005, de medidas administrativas y fiscales. En concreto, estos servicios son los de almacenamiento de residuos urbanos en los centros de transferencia y su transporte hasta las instalaciones de valorización o eliminación, así como la gestión final de los referidos residuos urbanos mediante valorización o eliminación.

Igualmente, en el artículo 6.2 de la mencionada Ley 8/1993, se recoge el compromiso del Gobierno de Cantabria de prestar el apoyo necesario a las Entidades locales que no puedan hacerse cargo de la adecuada prestación de los servicios de recogida y transporte de residuos urbanos que no formen parte del servicio público autonómico de gestión, previa petición de la Entidad local correspondiente. En concreto, estos servicios serían los de recogida y transporte de residuos urbanos hasta las estaciones de transferencia o directamente hasta las instalaciones de gestión final, a los que habría que añadir la realización de actividades de recogida, transporte y gestión final, mediante valorización o eliminación, de residuos hospitalarios generados en instalaciones de titularidad pública. En estos casos, al tratarse de servicios que no son de recepción obligatoria por parte de los beneficiarios, su retribución se lleva a cabo mediante precio público, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 8/1993 y en la normativa estatal y autonómica sobre tasas y precios públicos.

2- El Decreto 31/1991, de 21 de marzo, por el que se autoriza la constitución de la sociedad regional con la denominación de «Empresa de Residuos de Cantabria, S.A.», establece en su artículo 3º como objeto social de la empresa el siguiente: «el desarrollo y ejecución de cuantas actividades, obras y proyectos se requieran para el desarrollo de los servicios de recogida, transporte, tratamiento y gestión en general, de los residuos generados en Cantabria».

Consecuentemente con lo anterior, la Empresa «MARE, S.A.» realizará las funciones que en esta materia le encomienda la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, y que aparecen descritas en la cláusula segunda del presente convenio.

3 - La Empresa «Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.» (MARE, S.A) es una sociedad mercantil pública de las reguladas en la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de Cantabria. La citada empresa figura adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y su capital pertenece en su totalidad a la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Por ello, y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1.1) del TRLCAP, según las modificaciones introducidas mediante el RD Ley 5/2005, de 11 de marzo, la encomienda de gestión que se realiza a «MARE, S.A.», deberá formalizarse a través del oportuno convenio de colaboración sin que resulte de aplicación la normativa sobre contratos de las Administraciones Públicas.

Del mismo modo, razones de eficacia y eficiencia aconsejan utilizar los servicios de «MARE, S.A.», para que dicha empresa lleve a cabo los trabajos materiales de apoyo a las tareas de gestión recaudatoria de las tasas o precios públicos que corresponde liquidar al Gobierno de Cantabria en materia de residuos urbanos y hospitalarios, siempre bajo la premisa de mantener en manos de la Administración tanto la titularidad del ingreso como el ejercicio de cuantas actuaciones impliquen el ejercicio de potestades públicas.

En virtud de lo expuesto, ambas partes suscriben el presente Convenio, ajustado a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto y ámbito de aplicación del Convenio.

1. El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones que han de regir la encomienda de gestión a la sociedad mercantil pública «Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.» (MARE, S.A), por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma, de la prestación de determinados servicios de su competencia en materia de gestión de residuos urbanos y hospitalarios, así como de diversos trabajos materiales de apoyo a las tareas de gestión recaudatoria de las tasas o precios públicos que corresponde liquidar al Gobierno de Cantabria, como consecuencia de la prestación de los anteriores servicios.

2. Los servicios a prestar por «MARE, S.A.» en aplicación de lo establecido en la cláusula anterior, comprenderán el conjunto de actividades y operaciones enumeradas en las cláusulas segunda.

Segunda.- Servicios que se encomiendan a «MARE, S.A.».

Los servicios que se encomiendan a «MARE, S.A.», mediante este Convenio serán los siguientes:

1.- Servicios a prestar en materia de gestión de residuos urbanos y hospitalarios:

«MARE, S.A.», llevará a cabo la realización de la totalidad de los trabajos relativos a las siguientes actividades de gestión de residuos que corresponda realizar al Gobierno de la Comunidad Autónoma, incluida la explotación de las infraestructuras correspondientes:

A) Actividades inherentes al servicio público autonómico de gestión de residuos urbanos, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Cantabria:

- A.1. Almacenamiento de los residuos urbanos en los centros de transferencia y transporte desde dichos centros hasta las instalaciones de valorización o eliminación,

- A.2. Gestión final de los residuos urbanos en las instalaciones de valorización o eliminación.

B) Actividades de gestión de residuos no incluidas en el anterior apartado a):

- B.1. Servicios de recogida y transporte de residuos urbanos hasta las estaciones de transferencia o directamente hasta las instalaciones de gestión final (conocidos comúnmente como servicios de "recogida en baja") que tenga que prestar el Gobierno de la Comunidad Autónoma, previa petición y en apoyo de las Entidades locales, de acuerdo con los artículos 6.2 y 9.2 de la Ley 8/1993.

- B.2. Actividades de recogida, transporte y gestión final, mediante valorización o eliminación, de residuos hospitalarios generados en instalaciones de titularidad pública. A estos efectos, tendrán la consideración de residuos hospitalarios los definidos en el artículo 4.1 del Decreto 22/1990, de 7 mayo, por el que se establecen las normas para la gestión de los residuos hospitalarios.

2.- Trabajos materiales de apoyo a las tareas de emisión de liquidaciones:

«MARE, S.A.», llevará a cabo los trabajos materiales de apoyo a las tareas de gestión recaudatoria, en relación con la tasa de gestión final de residuos urbanos y con los precios públicos liquidados por la Consejería competente para retribuir, respectivamente, los servicios enumerados en los incisos a) y b) del apartado 1 de esta cláusula.

Estos trabajos incluirán las siguientes actuaciones:

- Grabación de las declaraciones, liquidaciones y otros documentos relacionados con el objeto del Convenio (Tasa de gestión final de residuos urbanos y precios públicos por recogida de residuos sólidos urbanos y hospitalarios) en las instalaciones de MARE, en el sistema unificado de gestión de ingresos MOURO del Gobierno de Cantabria.

- Impresión de los documentos y elementos de notificación para su traslado a la Consejería de Medio Ambiente.

Tercera.- Régimen Jurídico.

El presente convenio tiene posee naturaleza administrativa, rigiendo en su interpretación y desarrollo por el ordenamiento jurídico administrativo, y siendo de aplicación los principios de la vigente Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para resolver las dudas que pudieran suscitarse.

Cuarta.- Medios humanos y materiales.

«MARE, S.A.», queda obligada a aportar los medios humanos, materiales y técnicos así como la logística necesaria, para el desempeño de las actividades y servicios que se le encargan de acuerdo con este Convenio. Consecuentemente, el personal de «MARE, S.A.», que realice las actividades derivadas del presente Convenio no tendrá ningún tipo de vinculación, de carácter laboral o administrativa, con el Gobierno de Cantabria.

En este sentido, «MARE, S.A.», ostentará a todos los efectos la condición de empresario respecto del personal a su cargo, ejerciendo respecto a éste los poderes de dirección, control y disciplinario. Del mismo modo, la citada empresa quedará obligada a cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo.

Quinta.- Régimen económico y financiero.

1. El coste aproximado de los servicios que prestara «MARE, S.A.», a la Consejería durante el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre, asciende a la cantidad de ocho millones cuatrocientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco euros con veintitrés céntimos (8.476.485,23 euros). Para la determinación de este costo se ha realizado un análisis económico que se adjunta como Anexo I del presente convenio.

Dichos servicios se abonarán mensualmente mediante factura presentada por «MARE, S.A.», teniendo en cuenta los servicios prestados en ese mes de acuerdo con la regla del servicio hecho, y a la que prestará expresa conformidad el Jefe de la Unidad responsable de la Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo con el contenido previsto en el artículo 16 de la Ley 5/2005, de Presupuestos Generales de Cantabria para 2006.

Dicho gasto se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria del estado de créditos de gastos de la Consejería de Medio Ambiente: 07.00.451M.227.06

2. Las facturas que emita «MARE, S.A.», deberán reunir los requisitos establecidos en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre.

Sexta.- Control y seguridad de la información.

1. Todas las actuaciones derivadas del presente Convenio, y en especial las señaladas en el apartado 2 de la cláusula segunda, se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento de Medidas de Seguridad de Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio.

2. «MARE, S.A.», tratará los datos de carácter personal a los que tenga acceso en la gestión de los servicios que se le encargan, conforme a las instrucciones que reciba de la Consejería competente, sin que pueda suministrar ninguna información ni dar publicidad de los mismos a personas o entidades no autorizadas expresamente por aquélla.

Tampoco podrá la empresa subcontratar con terceros el tratamiento de dichos datos.

3. Sin perjuicio de las medidas de índole técnica y organizativa a implementar por la Consejería competente para garantizar la seguridad de los ficheros «MARE, S.A.», se compromete a adoptar cuantas sean necesarias para evitar la alteración, pérdida, acceso o tratamiento no autorizado de los datos contenidos en los mismos.

Las medidas de seguridad alcanzarán a los ficheros automatizados, centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal sujetos a la Ley Orgánica 15/1999.

4. «MARE, S.A.», acepta someterse a las actuaciones de comprobación que, en cualquier momento, pueda acordar la Consejería competente en la materia objeto del presente Convenio, al objeto de verificar la adecuada utilización de la información obtenida al amparo del mismo.

5. Los incumplimientos en la materia por parte de «MARE, S.A.», darán lugar a la aplicación del régimen sancionador recogido en el artículo 43 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, sin perjuicio de las consecuencias que puedan derivarse de lo establecido en otras normas del Ordenamiento y, en especial, de la Ley General Tributaria.

Séptima.- Obligación de sigilo.

1. El personal de «MARE, S.A.», que tenga conocimiento de los datos de carácter personal suministrados en virtud del presente Convenio estará obligado al más estricto y completo sigilo respecto de ellos.

La violación de esta obligación implicará incurrir en las responsabilidades penales, administrativas y civiles que resulten procedentes, así como el sometimiento al ejercicio de las competencias que corresponden a la Agencia de Protección de Datos.

2. Las responsabilidades de cualquier índole que se pudieran derivar de la indebida utilización de la información suministrada en ejecución de este Convenio deberán ser hechas efectivas por parte de la empresa.

Octava.- Contrataciones con terceros.

La contratación con terceros que realice «MARE, S.A.», en ejecución de las actividades derivadas del presente convenio se regirá por lo dispuesto en el artículo 2.1 y Disposición Adicional Sexta del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Novena.- Comisión de seguimiento.

Tras la firma del presente Convenio se creará una Comisión de Seguimiento, integrada por seis vocales designados, dos por la Consejería de Economía y Hacienda, dos por la Consejería de Medio Ambiente y dos por «MARE, S.A.», la Comisión de Seguimiento estará copresidida por uno de cada uno de los dos vocales de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente, designados por los titulares respectivos de cada Consejería.

La Comisión se reunirá a requerimiento de cualquiera de las partes, y al menos una vez cada seis meses, para examinar los resultados e incidencias de la colaboración realizada. No obstante, la Comisión celebrará necesariamente una reunión con carácter previo a la aprobación por el Consejo de Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio posterior, al menos con una antelación mínima de un mes sobre la fecha límite establecida para dicha aprobación.

En todo caso, la Comisión será competente para:

a) Coordinar las actividades necesarias para la ejecución del Convenio, así como para llevar a cabo su supervisión, seguimiento y control.

b) Resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del Convenio.

c) Determinar las medidas a acordar frente a eventuales incumplimientos, por cualquiera de las partes, de las condiciones establecidas en el presente Convenio.

Décima.- Plazo de vigencia y entrada en vigor.

1. El presente Convenio surtirá efectos desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2006, prorrogándose expresamente, salvo que sea denunciado por cualquiera de las partes manifestando por escrito su voluntad de resolverlo, al menos con tres meses de antelación a la fecha de terminación del plazo inicialmente pactado o de cualquiera de sus prórrogas. En todo caso, la prórroga quedará supeditada a la existencia de consignación presupuestaria suficiente en los Presupuestos Generales de las correspondientes anualidades.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y debido a que desde el 1 de enero de 2006, se han venido prestando por la sociedad mercantil pública, de facto, los servicios que constituyen el objeto del presente convenio de encomienda de gestión, «MARE, S.A.», percibirá la indemnización correspondiente por las actividades realizadas desde el 1 de enero hasta el momento de la entrada en vigor de este convenio, previa conformidad de las facturas por el Jefe de la Unidad correspondiente.

3. Del mismo modo, con anterioridad a la fecha de terminación del plazo inicialmente pactado o de cualquiera de sus prórrogas, ambas partes podrán acordar modificaciones sobre el contenido de cualquiera de las cláusulas del Convenio, que se incorporarán como Adenda y pasarán a formar parte del mismo.

4. Finalizada su vigencia todos los ficheros automatizados empleados para el almacenamiento y tratamiento de datos de carácter personal deberán ser devueltos a la Consejería competente.

Undécima.- Jurisdicción competente.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para conocer y resolver cuantas dudas y controversias surjan en la interpretación y cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio.

Y, en prueba de su conformidad, firman el presente Convenio, por duplicado en Santander, en la fecha y lugar arriba indicados.

Santander, 30 de junio de 2006.—La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga Saiz.—El presidente de MARE, José Ortega Valcárcel.

06/9175

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de resolución desestimatoria relativa a la solitud de oferta de trabajo para extranjeros.

No habiéndose podido notificar en el domicilio indicado por la empresa JIANWU YE, con N.I.F. X-2931845-N, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999 de 13 de enero, se hace pública la resolución del director general del Servicio Cántabro de Empleo, de fecha 30 de mayo de 2006, por la que se desestima la solicitud de oferta de trabajo para extranjeros.

“Resuelve: Desestimar la solicitud formulada por la empresa JIANWU YE al incluir la oferta de empleo exigencias, requisitos y condiciones discriminatorias, no continuándose con su gestión, ni expidiéndose, por tanto, la certificación negativa respecto a la misma, preceptuada en el Art. 50 del R.D. 2393/2004, de 30 de diciembre”.

Se publica el presente anuncio para que sirva de notificación a la empresa JIANWU YE, indicándole que tiene a su